

Gonzalez, contra la Orden de Gefe político de Chihuahua contrada á que no funda metales y granzas en el horno de fundicion que tiene establecido en la misma ciudad.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan José de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José S. Artaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 12 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por D. Benito Resusta, en representacion de los dueños de las Salinas del Peñon Blanco, contra el artículo 1º del decreto número 64 de la Legislatura del Estado, que aumenta la contribucion directa de uno por ciento, impuesta por la ley de Hacienda anterior, para las fincas rústicas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que D. Benito Resusta como socio Administrador de las Salinas del Peñon Blanco, y en representacion de sus dueños, solicita amparo de la Justicia de la Union, contra el decreto número 64 de la actual H. Legislatura del Estado, que reforma el que la misma Cámara tiene expedido

bajo el número 28, por creer violadas con ellos directamente, las garantías individuales que otorga á los ciudadanos la fraccion 2ª del artículo 31 de la Constitucion de la República, y de un modo indirecto las que tambien conceden los artículos 4, 22 y 27 de la misma, conceptuando comprendido el caso en la fraccion 1ª del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Pedido el informe respectivo al Gobierno del Estado, como la autoridad ejecutora de aquella disposicion; y ha faltado por lo mismo á uno de los deberes que le incumben. No obstante, como el participio ó intervencion que en el caso tiene, no es mas que el de llevar la voz informativa, á su perjuicio debe refluir aquella omision y desacato en que incurre.

Se trata pues, de que la H. Legislatura del Estado, al expedir la ley de 11 del que rige, no ha guardado por cierto la proporcion y equidad que debe haber al dictarse los impuestos para los gastos públicos del mismo Estado, y para demostrarlo se alude á las diversas comparaciones y reflexiones que surgen á primera vista de la desproporcionalidad que se amorita. En efecto, dividida como lo está la propiedad raiz en urbana y rústica, á cada uno le está señalada según su valor y calidad, la cantidad con que á proporcion debe contribuir para aquellos objetos; por manera, que todo lo que sea alterar esa misma proporcion, es excederse ó imponerle gravámen mayor del á que está obligado y sea compatible con la equidad que las leyes determinan.

Siendo esto así, las Salinas del Peñon Blanco están comprendidas, lo mismo que todas las de su clase en el Estado, en la segunda de aquella propiedad, esto es, en la rústica, porque ciertamente no son la simple finca ó habitación constituida la que forma la propiedad rústica, sino el terreno explotado ó inculto, como dice el quejoso, cuyos productos ó esquilmos no pueden ser iguales, y por eso es, que aun las mismas leyes los distinguen en naturales, industriales y

civiles, que por cierto demandan el auxilio de la inteligencia y del trabajo del hombre para su aprovechamiento y utilidad.

Así es, que bajo el precedente de que la cuantía del impuesto debe tener por base fija y segura, el valor de la cosa sobre que se hace pesar, y en ello á mas de la proporción con que debe medirse el primero, no debe faltar el equitativo nivelamiento, todo lo que sea mayor y fuera de estas consideraciones legales, produce la arbitrariedad y da el resultado de la violación de prerogativas otorgadas por la ley.

Si las Salinas del Peñon Blanco y las demas que se explotan en el Estado, están comprendidas por la misma distinción que hace la fracción 1ª del artículo 19 de la ley número 28 en la clase de fincas rústicas, esa reforma que por la 64 se hace, demuestra: que en efecto no se ha tenido mas fin al expropiarla, que gravar mayormente aquella finca con el dos y medio por ciento, siendo que las demas de su clase en el Estado, solo sufren el pago del uno por ciento, en lo que humanamente ni hay la proporción equitativa que aquel precepto constitucional impone, ni la distribución que en los propios términos se exige, porque si es que se atiende á la mayor estimación de la propiedad y mejor calidad de sus frutos, resulta siempre que el producto del uno por ciento que debe pagar como tal finca rústica, semejante á las demas, debe ser mayor tambien con proporción al menor del precio y esquilmos de las demas de su clase en el Estado, y de tal diversidad en dicho impuesto, resulta muy flagrante la violación de garantías, que el artículo constitucional mencionado concede, cuando se trasluce por esa desproporción, cierta mira que se tuvo al disponer el uno y medio por ciento mas de lo que antes pagaba y de lo que está señalado á las otras Salinas del Estado.

No está, sin embargo, conforme el ministerio con la apreciación que se hace, respecto de que aquel aumento constituye una multa excesiva, para deducir como deduce el que-

joso la infracción de las garantías que tambien concede el artículo 22, porque no ve la existencia de algun delito que á ello hubiese dado lugar, ni cual puede ser esto para decir propiamente que tal pena ha sido condignamente impuesta, y esto hace que no pueda ni deba conceptuar aquel aumento como penal para la finca de que se trata.

No sucede lo mismo respecto de las garantías de que hablan los artículos 4º y 27 de la misma Carta fundamental á que alude el peticionario, porque aunque de una manera indirecta se priva el propietario de la percepción de su industria ó trabajo suspendido, al elaborar los frutos naturales que produce aquella, se le priva tambien del provecho y goce de ellos, en la cuantía y valor proporcional tambien al mismo trabajo, y con ello igualmente se le quita la propiedad que á todo le perteneciera, sin contar con su consentimiento, careciendo de la indemnización respectiva, y sin guardar para ello los formales requisitos de la ley que debe determinar la autoridad que haga la expropiación; y por consiguiente, perjudicándose mas bien en el caso esa pública utilidad á que mira en su objeto y favor el beneficio público, porque con el aumento en el precio ó estimación de los frutos á que queda facultado el propietario, por el pago excesivo del impuesto con que se gravan, se perjudica mas bien al consumidor y deja de existir esa pública conveniencia y utilidad.

Por lo expuesto, el mismo ministerio es de opinión, que declarando ese Juzgado haber sido violadas las garantías individuales que contienen los artículos 4º, 27 y fracción 2ª del 31 del Pacto fundamental, se servirá dispensar el amparo solicitado á los propietarios de las Salinas del Peñon Blanco, contra lo dispuesto en el artículo 1º del decreto que bajo el número 64 expidió la H. Legislatura del Estado, en 11 del que fina.

Tal es mi parecer, que como siempre sujeto al mas ilustrado de ese Juzgado.

San Luis Potosí, Mayo 31 de 1874.

Es copia que certifico. San Luis Potosí, 10 de Junio de 1874.—Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Junio 10 de 1874.—
Visto el escrito de D. Benito Resusta, en que con calidad de socio Administrador de las Salinas del Peñon Blanco y en representacion de sus dueños, pide amparo y proteccion de la Justicia federal, contra el art. 1º del decreto núm. 64 de la actual H. Legislatura del Estado, que aumenta la contribucion directa de uno por ciento impuesta por la ley núm. 28 de Hacienda, vigente para las fincas rusticas, hasta el 2 y medio respecto de la negociacion que es á cargo del mismo quejoso, expresando que con esa disposicion se infringe la fraccion 2ª del art. 31 de la Constitucion federal, lo cual importa una violacion de las garantías que otorgan los arts. 4º, 22 y 27 del mismo Código, estando comprendida la queja en la fraccion 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; el pedimento del C. Promotor fiscal, en que funda que con aquel decreto se violan las garantías invocadas por el quejoso, con escepcion de lo á que se refiere el art. 22; porque no se impone multa á las Salinas, supuesto que no hay delito de parte de la empresa que le hiciese acreedor á ella, por lo que debe concederse el amparo solicitado; visto el escrito que con carácter de explicacion al de queja, presentó D. Benito Resusta; visto por último el informe que se pidió al C. Gobernador del Estado, que no se sirvió remitir dentro del término legal, sino hasta quince dias despues, estando las partes citadas para sentencia, cuyo informe consiste en la insercion de un acuerdo de la H. Legislatura, en que enumera las razones que tuvo para reformar la ley de Hacienda respecto de las Salinas del Peñon Blanco en los términos del

decreto, causa de esta queja; y ademas, que no procede el amparo solicitado, porque no se violan con las leyes en abstracto, como la de que se trata, las garantías individuales, sino que ese recurso procede contra actos que violen esas garantías; por lo que el suscrito Juez ha procedido con infraccion notoria de los arts. 2º, 4º, 9º, 19 y 23 de la ley de 20 de Enero de 1869; vista por último la citacion para sentencia y lo demas que consta de autos.

Considerando primero: que ante todo debe examinarse si procede ó no el amparo en este caso, ó lo que es igual, si el quejoso ha llenado los requisitos que exige la ley de 20 de Enero de 1869 en su art. 4º, para deber darse entrada al recurso.

Que desde luego el art. 101 de la Constitucion, viene en apoyo de que procede el amparo contra leyes en abstracto, ó sea competentemente promulgadas y sancionadas, como lo ha sido el decreto núm. 64 de la actual H. Legislatura, porque los términos textuales de aquel artículo expresan terminantemente que los Tribunales federales resolverán toda controversia que se suscite por leyes que violen las garantías individuales, lo cual quiere decir que las leyes que tienen la fuerza de tales, ó las competentemente promulgadas y sancionadas, pueden violar por sí, antes de su aplicacion material, las garantías individuales, pudiendo ser entre otras la razon, que la ley promulgada con todas las formalidades requeridas, como lo ha sido el decreto núm. 64 impone una obligacion perfecta y exigible de que se cumpla con lo que ella manda por aquellos, á quien se refiere, de suerte que el amparo antes de la aplicacion de una ley anticonstitucional, procede, porque esa ley implica por su mera promulgacion, un principio de ejecucion, y no dice la Constitucion que deba esperarse al hecho de aplicacion de la ley para solicitar hasta entonces el quejoso, el amparo que cree debe impartírsele por la Justicia federal, antes de que llegue el hecho material de aplicacion de la ley, pues

se comprende que no es por decirlo así una ley anticonstitucional promulgada, una amenaza de violacion de garantías contra la que no procede el recurso de amparo, sino que ya queda pendiente solamente de consumarse esa violacion, para lo cual no hay razon legal que coloque al interesado en la esfera de que se consume la violacion, y mas tratándose en el caso presente de una ley que inmediata, nominal ó individualmente, se dirige á la sociedad de Salinas del Peñon Blanco, imponiéndole la obligacion de pagar una contribucion del dos y medio por ciento sobre su valor.

Que no puede decirse infringido el art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, porque la declaracion que recaiga en este juicio se va á limitar á solo los individuos que forman la sociedad de Salinas del Peñon Blanco, y á los dueños de éstas, al caso especial sobre que se versa y sin hacer declaracion general del decreto núm. 64.

Que respecto del art. 4º de esa ley orgánica, el quejoso explica el hecho ó motivo de su queja, á saber, el art. 1º de aquel decreto y designa las garantías individuales violadas en su concepto.

Que en cuanto al art. 9º, se habla del caso de suspension del acto reclamado y aunque aquí no se habria suspendido, porque no se pidió, ó aunque se hubiese pedido, porque no habia urgencia notoria, en todo caso se concretaría la suspension á los efectos de ese decreto, lo cual no seria nocivo. segun puede leerse en el Semanario Judicial de la Federacion, en que la Corte Suprema de Justicia lo ha consignado; si bien es cierto que las excepciones no deben citarse, aunque no es dudoso que se han pronunciado teniendo por base la Constitucion, con lo que queda demostrado que el Juzgado procedió bien abriendo el juicio con arreglo al art. 9º.

Que el art. 1º de la ley orgánica tendrá su aplicacion en el evento de que la Corte Suprema confirme este fallo, acudiendo el Juez de Distrito al C. Gobernador del Estado para que cumpla con la ejecutoria, ha-

ciendo que no se lleve á efecto el decreto, en lo que mira á los quejosos.

Que en cuanto al art. 28, la restitution consistirá no en que se decrete que los quejosos pagarán con arreglo á la ley núm. 28, porque los Tribunales federales no dan leyes, sino que no se exija á los quejosos el dos y medio por ciento sobre el valor de las Salinas del Peñon Blanco, ó bien, que no se produzcan los efectos de ese decreto, en lo que mira á los quejosos.

Considerando, segunda, respecto del punto contravertido en este juicio: que debe resolverse por el Juez federal, que en los terminos literales del decreto número 64, se impone á las Salinas del Peñon Blanco, la obligacion de pagar una contribucion de dos y medio por ciento sobre su valor, mientras las fincas rústicas y la demás Salinas que se explotan en el Estado, han de satisfacer el uno por ciento en los propios términos, esto es, bajo la base de su valor, por donde se ve con evidencia, que hay desproporcionalidad numérica entre las contribuciones asignadas á aquella y estas fincas, porque bajo la misma base del valor se señala un impuesto á las Salinas del Peñon Blanco, mayor en uno y medio por ciento que el marcado á las otras Salinas y fincas rústicas en el Estado.

Que con arreglo al artículo 31 fraccion 2ª de la Constitucion, todo mexicano está obligado á contribuir á los gastos públicos del Estado en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo cual, á la vez que concede facultad á los Estados, les impone la restriccion y el precepto de señalar las contribuciones, atendiendo siempre en la determinación de ellas á la equidad, de suerte que nunca deban ser excesivas, como se expresa el C. Castillo Velasco en sus apuntamientos.

Que la infraccion de este artículo en la desproporcionalidad y falta de equidad de los impuestos, da derecho á los individuos perjudicados, á quejarse de ello, acudiendo al amparo, ó si se quiere al poder Legisla-

tivo del Estado para pedir la reforma del decreto relativo, aunque no puede negarse que la eleccion del remedio legal, queda al arbitrio de los interesados.

Que no podrá observarse válidamente que aquel precepto no importa una garantía individual, porque no está comprendido en la seccion 1ª del título 1º de la Constitucion, sino solo una obligacion de los Estados; pues si no lo está esplicita, si lo está implícitamente, una vez que la infraccion de la parte 2ª del artículo 31 viene indirecta pero forzosamente, á violar garantías individuales, ó como dice el C. Emilio Velasco hablando del amparo de Morelos: una Constitucion es ley, que tiene por objeto, restringir la accion de los Gobiernos, y sus preceptos forman un conjunto de garantías contra esa accion, ó bajo el nombre de garantías individuales, se entiende, no solo las declaraciones que con la denominacion de derechos del hombre hace la Constitucion, sino todos los derechos que la misma Constitucion asegura.

Que el decreto número 64 de la actual H. Legislatura del Estado en su artículo 1º, establece respecto de las Salinas del Peñon Blanco un impuesto desproporcional, porque siendo la base del mismo impuesto el valor de las fincas y negociaciones de que se trata, mayor es el dos y medio por ciento que señala á aquellas Salinas, que el uno fijado para las otras.

Que no obsta el que la H. Legislatura haya tenido presente para aumentar el impuesto á aquellas Salinas, el que sea mas productivo su capital, porque consta del avaluo oficial de fojas 7, que se estimó el capital bajo la base del producto.

Que sobre ser desproporcional ese impuesto, es exesivo segun resulta de la simple comparacion, y su calidad de exesivo constituye su falta de equidad.

Que este impuesto desproporcional y falto de equidad, viola en la persona de los quejosos el art. 4º de la Constitucion, porque disminuye el producto de su industria, limi-

TOMO VI.—PARTE II.

tándole la facultad de aprovecharse de sus productos mas allá de lo justo.

Que viola igualmente ese impuesto en la persona de los quejosos, el art. 27 de la Constitucion, porque limita el derecho de propiedad, el de aprovecharse de los productos de la cosa, que es uno de los elementos esenciales del dominio ó propiedad particular, segun se expresa Ortolan al tratar de esta materia, citado por el C. Isidro Montiel y Duarte, en la pág. 501 de su Estudio sobre garantías individuales.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, debia declarar y declaro: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Benito Resusta, con su carácter de socio Administrador de las Salinas del Peñon Blanco, y en representacion de sus dueños, contra el artículo 1º del decreto número 64 de la actual H. Legislatura del Estado, que les impone una contribucion de dos y medio por ciento sobre el valor de esa negociacion.

Hágase saber; publíquese y elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Lo decretó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado. Doy fé.—Firmado.—*Conrado Diaz Soto.*—*Donaciano Monroy*, secretario.

Es copia que certifico. San Luis Potosí, 15 de Junio de 1874.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 29 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Benito Resusta en representacion de los dueños de las Salinas del Peñon Blanco, contra el artículo 1º del decreto número 64 de la Legislatura del Estado que aumenta la contribucion directa de uno por ciento impuesta por la ley de Hacienda anterior

para las fincas rústicas, hasta un dos y medio por ciento respecto de las Salinas del Peñon Blanco, disposicion, que en concepto del solicitante importa la violacion de la fraccion 2ª artículo 21 y de los artículos 4, 22 y 27 de la Constitucion federal. Vistos los documentos que obran en los autos; el parecer fiscal y la sentencia del C. Juez de Distrito.

Considerando: que la fraccion 2ª del artículo 31 de la Carta federal, al imponer á todo mexicano la obligacion de contribuir para los gastos públicos, impone al Legislador la obligacion correlativa de la equidad y proporcionalidad en el impuesto, importando esta taxativa la consagracion de una garantía para el contribuyente, intimamente ligada con las garantías individuales que son en la Constitucion federal la salvaguardia del derecho de propiedad.

Que de la simple lectura del artículo de la ley contra la cual se solicita el amparo, resulta con evidencia demostrado, que siendo una misma la base del impuesto para negociaciones de idéntica especie y habiéndose aumentado arbitrariamente la cuota de una de ellas en mas del doble, se establece una desproporcion flagrante en perjuicio de una negociacion, con la cual y por forzosa consecuencia se falta tambien á la equidad.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*Simon*

Guzman.—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Octubre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por el C. Manuel Ayala, contra los actos del Juez 3º de lo criminal, que lo mandó reducir á prision, poniéndolo en seguida á disposicion del Gobierno del Distrito.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Manuel Ayala, quejándose: de que el Juzgado 3º de lo criminal, lo habia consignado á disposicion del Gobierno del Distrito para ser remitido á Puebla, suponiéndolo reo del delito de peculado, cometido en San Juan de los Llanos, cuando como Gefe político recaudaba la contribucion de exentos de la guardia nacional; que se le exhortaba indebidamente por el Juzgado 2º de instruccion de Puebla, tanto por no ser Juzgado competente, por tratarse de actas que tuvieron lugar en San Juan de los Llanos, como por que el móvil era ejercer venganzas en su persona, por haber atacado por la prensa los abusos cometidos por el Gobierno de Puebla, no conteniendo el exhorto dirigido al Juzgado 3º de lo criminal, las inserciones legales, ni fundado el procedimiento, con todo lo cual se violaba en su persona, la garantía que concede el artículo 16 de la Constitucion, y se faltaba á las prescripciones de la circular de 30 de Noviembre de 1872, concluyendo con pedir la suspension del acto reclamado.

Acordada esta de plano por el Juzgado, mandó que continuara la sustanciacion del